

Capitalismo y corrupción

El Estado pervertido

Por José Luis Parra

José Luis Parra. Profesor de Historia y Geografía

La historia de la humanidad está llena de hechos heroicos que enaltecen a sus protagonistas por su determinación a ofrendar todo por una idea, un compromiso, por la justicia o la libertad.

Sin embargo, es especialmente dura en nuestros países en los que tales sacrificios y determinaciones se han enfrentado con las más extraordinarias bajezas, renunciaciones y traiciones.

Lo dramático es que la acción de los traidores tuvo consecuencias nefastas, como la muerte de millones de seres humanos o la destrucción de la naturaleza. Y fue determinante para la conformación de relaciones sociales y económicas que sostuvieron y aún sostienen terribles desigualdades, sentenciando a miles de millones a una pobreza degradante.

La historia de nuestros países subdesarrollados contiene innumerables hechos de corrupción, de traición y rapiña.

Es una práctica común que los lazos espurios entre personajes que detentan el poder económico y el poder político se mantengan ocultos cuando se diseñan acciones de gobierno que tienen el objetivo de beneficiar a unos pocos utilizando el aparato del Estado y a sus funcionarios para aprovecharse de los recursos de la nación.

Las acciones surgidas de estas sociedades, pensadas a espaldas del pueblo, no pueden disimularse al momento de ser ejecutadas, por lo que -a lo largo de los siglos- las clases dominantes han utilizado diversos métodos para institucionalizar la corrupción basando su estrategia en el abuso de autoridad. En algunos casos el robo se impone por la fuerza. En otros, se lo presenta públicamente con impudicia, exhibiéndolo como un suceso feliz, como una noble acción de gobierno.

La imposición del terror, el miedo a perder alguna prerrogativa o la falta de participación y compromiso ciudadano permiten que el discurso oficial no sea controvertido.

La idea impuesta se sustenta en el aparato del Estado. Quien no esté de acuerdo se convierte en un desestabilizador, renuente al desarrollo y el progreso. Otro modo de imponer la mentira es el de plantear que cada acción emprendida generará beneficios, tales como la creación de nuevos puestos de trabajo. El que está en contra de ese discurso se convierte así en “un enemigo del pueblo”.

Muchas han sido las acciones de gobierno que resultaron groseras y evidenciaron tremendos negociados a favor de empresas amigas o multinacionales. Veamos sólo algunos ejemplos en la historia argentina:

- 1824. Endeudamiento con la Baring Brothers.
- 1825. Bernardino Rivadavia nacionaliza las Minas de Famatina para conceder a una em-

presa inglesa (The Provinces of River Plate Mining Association, que él mismo integraba) la explotación de oro.

- 1853. Apertura de los ríos interiores al comercio extranjero luego del derrocamiento de Rosas.
- 1878. Conquista de los territorios de los pueblos originarios para imponer la producción de materias primas necesarias para el sistema fabril británico.
- 1880. Privatización del ferrocarril del Oeste a favor de intereses británicos.
- 1933. Firma del Tratado Roca Runciman
- 1936. Prórroga de las concesiones eléctricas. Escándalo de la Chade
- Década de 1980. Estatización de las deudas privadas y reconocimiento oficial de la ilegítima Deuda Externa
- Década de 1990. Privatización de las empresas estatales (Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, YPF, ENTEL, SEGBA, Agua y Energía Eléctrica, Gas de Estado, Hidronor y Transener).

En esta oportunidad quise seleccionar tres ejemplos ocurridos en distintos espacios y tiempos de la Argentina, en los que la corrupción y la traición atravesaron a la sociedad en su conjunto.

La intención es mantener el estado de alerta y evitar que no se naturalice ningún hecho -por mínimo que sea- en el que subyazca algún tipo de corrupción o en el que funcionarios públicos sean comprados -o se constituyan en meros intermediarios o agentes- para actuar a favor de las corporaciones privadas, utilizando y lucrando con lo que es de todos.

Existen algunos personajes hartamente conocidos que se alzan como el paradigma de la traición y la corrupción, tales como Bernardino Rivadavia o Justo José de Urquiza. Las élites dominantes desarrollaron una liturgia obligatoria apoyando a la Historia Oficial para consolidar la falsa imagen de un panteón de héroes y próceres con la finalidad de impedir un pensamiento crítico. Los sucesos más injustos se ocultaron o se publicitaron arteramente para que aparecieran como hechos positivos favorables al país.

A continuación presento tres relatos de nuestra historia que espero puedan ser relacionados -entre sí y con situaciones conocidas, actuales o pasadas- para ayudarnos a encontrar elementos comunes y entender que los hechos de corrupción no son meras situaciones aisladas o circunstanciales.

Episodio N° 1: en época de la Colonia

De los excesos y desórdenes del puerto de Buenos Aires

Hacia mediados del siglo XVII, la ciudad de Buenos Aires se encontraba muy lejos del poder y la gloria de Lima -la ciudad de los Reyes- capital del Virreinato de Perú que abarcaba toda América del Sur.

A pesar de la legislación que prohibía introducir mercaderías que no llegaran en barcos españoles y específicamente arribados a sólo dos puertos americanos, la falta de producción española, las continuas guerras y los ataques de los piratas ingleses obligaron a la Corona a otorgar permisos especiales para una actividad comercial “semilegal” realizada por la puerta trasera del Virreinato, en la lejana Buenos Aires.

Como consecuencia de la guerra por la sucesión española (1713) se firmó el Tratado de asiento de negros, que permitía a Inglaterra introducir 1.200 esclavos anuales por el puerto de Buenos Aires, con destino a Chile y Perú.

El comerciante francés Acarete du Biscay, quien desembarcó en Buenos Aires por motivos comerciales en 1658, dejó un interesante testimonio: “Izamos velas a fines de diciembre de 1657, en un buque de cuatrocientas cincuenta toneladas, y en ciento cinco días llegamos ... frente a Buenos Aires, donde encontramos veinte buques holandeses y dos ingleses, cargados de regreso con cueros de toro, plata en láminas y lana de vicuña, que habían recibido en cambio de sus mercaderías”.

La pequeña aldea pasó de 500 habitantes en el año 1600, a cerca de 4.000 a mediados de siglo.

Este crecimiento se sostuvo por la razón de que Buenos Aires se constituyó en la puerta de entrada del comercio ilegal que burlaba el sistema monopólico impuesto por la Corona. El contrabando permitió la consolidación de un grupo social en el que el prestigio y el poder se fundamentaron en la rápida obtención de ganancias.

La habitantes de la ciudad se movían entre lo legal y lo ilegal como “peces en el agua”. La ley no fue impedimento para el crecimiento de tan lucrativos negocios, que no pudieron sostenerse sino con la práctica de la corrupción de los funcionarios de gobierno.

Como señaló el historiador Raúl A. Molina, *“ese contrabando había dejado de ser el delito vulgar, clandestino y oculto, tal como se practicaba en todos los puertos del mundo. Tuvo en nuestra ciudad un desarrollo particularísimo y tomó un nombre de categoría, se llamó ‘ejemplar’, bautizado de este modo por sus propios inventores, que destacaban así con cierto donaire, la habilidad y picardía con que fue impuesto”*.

El negocio encontraba su punto débil al salir de la ciudad, ya que las mercaderías que no contaban con licencia oficial podían ser decomisadas en cualquier punto del virreinato. Juan de Vergara, ideólogo del término **“contrabando ejemplar”**, fue un verdadero adelantado en el arte de utilizar las leyes para el beneficio propio. Como lo explica Molina, *“ellos denunciaron los contrabandos fingidos y provocaron la intervención de las autoridades, para luego de ser practicado el remate, comprar nuevamente y obtener con ello, y esto era lo fundamental, la licencia que los autorizaba a revenderla en Potosí. Naturalmente, que autoridades y vecinos se hallaban complicados, pues de otro modo la tarea delictuosa hubiera sido imposible”*.

Sin embargo, no todo era corrupción y negociado. Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, fue un criollo que ocupó la Gobernación de Buenos Aires durante varios períodos.

En 1602 fue nombrado por primera vez gobernador de Buenos Aires, puesto que ocuparía hasta 1609. Tomó numerosas medidas para estimular el crecimiento de la pequeña aldea, como por ejemplo la creación de las primeras escuelas, la instalación de hornos de cocción de ladrillos y tejas para sustituir la construcción de adobe y la reconstrucción del fortín que protegía la ciudad.

También modificó la legislación sobre el trabajo de los indígenas, promoviendo la supresión de las mitas y encomiendas, sistema por el que los españoles aprovechaban el trabajo esclavo de los pueblos originarios.

Pero no fue hasta 1615 (cuarto mandato) que inició un proceso judicial contra la sociedad de contrabandistas (Partido confederado) que involucró prácticamente a todos los vecinos de la ciudad. Para poder llevarlo adelante, Hernandarias debió cambiar las autoridades del Cabildo que estaba en manos de los contrabandistas. El proceso alcanzó dimensiones extraordinarias y

se conoció como “**De los excesos y desórdenes del puerto de Buenos Aires**”.

Así, casi todos los habitantes fueron citados a declarar. Muchos de ellos quedaron detenidos. Pero el freno al contrabando provocó un notable desabastecimiento en la ciudad que generó la impopularidad del Gobernador Hernandarias.

La situación se agravó con la continuidad del juicio, creciendo la violencia. Los responsables del sistema de corrupción defendieron sus intereses y llegaron al extremo de asesinar al aguacil menor Domingo de Guadarrama, con lo que lograron atemorizar a otros testigos. El proceso que alcanzó un volumen de 19.000 fojas, se hizo lento por otras razones tales como la falta de papel o la complicidad de funcionarios.

En 1618, cumplido el mandato de Hernandarias, Diego de Góngora y miembros del partido confederado fueron confirmados en los cargos de la gobernación. Góngora llegó al Río de la Plata acompañado por un fuerte embarque de contrabando. Su primera medida fue encarcelar a Hernandarias y confiscarle sus bienes. Luego retomó el control del Cabildo, liberó a los acusados y encarceló a su vez a los leales de Hernandarias.

Por su parte, Hernandarias fue liberado luego de casi tres años en prisión. Su juicio de residencia demandó varios años hasta que se probó su inocencia. Nunca recuperó sus bienes, confiscados por sus enemigos.

Juan de Vergara, jefe del partido confederado que nucleaba a los partidarios del contrabando, acumuló gran fortuna. Entre sus posesiones se contaban 38 estancias, varias casas y 75 esclavos.

Buenos Aires recuperó así su bien ganada fama de capital del contrabando.

Jorge Juan y Antonio Ulloa se admiraban en 1748 (en su libro “**Noticias Secretas de América, sobre el estado naval, militar y político del Perú y provincia de Quito**”), acerca de que el contrabando “*es un mal que no hay puerto, ciudad o población que no padezca en mayor o menor medida. Lo que se hace más insensible en este particular es que ni el honor ni la conciencia, ni el temor ni el reconocimiento de verse mantenidos por el soberano con salarios muy crecidos, sirve de estímulo en aquellos países para dejar lo que es de la obligación de cada uno. Y así está manteniendo el rey, muy liberalmente, a sus mayores enemigos, que no cesan de usurpar sus derechos y menoscabar su Real Hacienda*”

El caso “De los excesos y desórdenes del puerto de Buenos Aires” y la lucha sostenida por Hernandarias no fueron hechos aislados en el marco de la historia de la colonización de América. Son parte del entramado histórico que nos permite entender el desarrollo y evolución de nuestros países.

Episodio N° 2: siglos XIX y XX

Tucumán, una provincia castigada

Los autores de textos de geografía económica consideraban a Tucumán -hasta hace unos años- como una provincia dedicada fundamentalmente a la caña de azúcar y a su industrialización en ingenios.

A lo largo de su historia, la producción fue variando. Durante los últimos años del siglo XIX, Tucumán era fundamentalmente una provincia cerealera, transformándose luego en una región especializada en la producción azucarera, habiéndose desplazado ese ítem durante la década de 1990 por la expansión del cultivo de soja y del limón.

Con el triunfo del sistema liberal a partir del derrocamiento de Rosas en 1852, se impuso un modelo de país agroexportador en el que se producían materias primas y consumían productos elaborados por la industria inglesa, principalmente.

Hasta 1876, la provincia se autoabastecía con cultivos como el trigo o maíz, así como lo producido por la actividad ganadera. Con la llegada del ferrocarril, comenzó a imponerse la monoproducción de caña de azúcar.

En 1903 se produjo un excedente en la producción cañera. El excedente no pudo ser colocado en el exterior, ya que Inglaterra, la primera potencia de ese momento, inhabilitó esa opción castigando la política proteccionista del gobierno argentino, que gravaba el azúcar extranjera para beneficiar la producción azucarera tucumana. Esta crisis motivó la intervención del gobierno nacional, que instauró por primera vez la solución de erradicar el cultivo, disminuyendo un 30 % del área sembrada.

La producción cañera siguió aumentando con los años. El resto de las producciones sufrieron los vaivenes generados por el estatus de Argentina como país productor de materias primas para el mercado internacional y su situación de dependencia frente a los procesos internacionales como las crisis económicas o las Guerras Mundiales.

A partir de 1930 y hasta 1960 se produjo un notable incremento del área y de la producción cañera, aunque también se notó un incremento en el área de cosecha de los frutales (especialmente cítricos como la naranja o el limón). Puede decirse que hasta la década del '60, la caña de azúcar fue un "monocultivo" en la provincia.

Cabe destacar que durante esos años se extendió el área de producción agrícola, debido a una política de alicientes fiscales para desmonte de terrenos y afincamiento de colonos.

Es a fines e la década del '60 que se introduce el cultivo de la soja en Tucumán.

En relación a la tenencia de la tierra, una gran superficie estaba en manos de productores familiares capitalizados (hoy conocidos como pequeñas y medianas empresas).

La revolución argentina

En junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente constitucional Arturo Illia. El nuevo gobierno de facto liderado por el General Juan Carlos Onganía, desplazó al Gobernador de Tucumán, Lázaro Barbieri. Su política económica estuvo signada por un salvaje liberalismo, impuesto por el Ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

En la provincia se vivían días de grandes movilizaciones, ya que los obreros de los Ingenios azucareros contaban con un importante nivel de organización gremial, destacándose la FOTIA como representante del sector, que exigía mejoras en las condiciones laborales y aumento de salarios.

En agosto de 1966, el gobierno nacional dictó una ley que decretaba la intervención de los ingenios y adelantaba los pasos tendientes a una reforma estructural de la economía de la provincia. Al tiempo, se cerraron 11 ingenios, dejando alrededor de 200.000 personas sin empleo. La

medida significó el cierre de casi el 30% de las industrias relacionadas con la actividad azucarera.

De acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial, se inició un proceso que culminó en la entrega de los ingenios a empresas multinacionales o socias de los intereses multinacionales, a valores inferiores a los reales, desplazando a los productores tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional. Se verificaba de esa manera el principio de la destrucción de la economía nacional para ponerse una vez más bajo el poder de los grandes intereses capitalistas.

El Proceso Militar

El plan de destrucción del sistema productivo se completó durante la década del '70 con la imposición de una nueva dictadura que se encargó de hacer desaparecer, asesinar, encarcelar y perseguir a miles de personas mientras se endeudaba y vaciaba a las empresas del Estado haciendo crecer el endeudamiento público de \$ 5.500 millones de dólares a \$ 46.000 millones de dólares.

Tucumán fue la provincia en la que comenzó a probarse el Plan represivo. Si bien la organización paramilitar "Triple A" actuó en las grandes ciudades, Tucumán fue elegida para instalar el primer centro clandestino de detención y desaparición de personas. Fue un verdadero campo de concentración y se conoció como la Escuelita de Famaillá. Funcionó en la Escuela Diego de Rojas, en las afueras de la ciudad de Famaillá a partir de febrero de 1975, coincidiendo con la imposición del "Operativo Independencia". De acuerdo a la palabra de los propios responsables del Operativo, como el General Acdel Vilas, se podían usar allí "métodos prohibidos por las leyes". Tucumán se constituía así en una provincia militarizada y los perseguidos fueron especialmente obreros y estudiantes.

La era del limón

Las muertes y el terror, la desaparición de personas y la cárcel, la destrucción de fuentes de trabajo, etc., sostuvieron el avance de los grupos multinacionales, que fue más contundente durante la década del '90 con la imposición de las medidas neoliberales. Juan José Natera Rivas y Ana Ester Batista Zamor explicaron la evolución de la provincia hacia una nueva monoproducción, la del limón: *"Durante la década de los noventa, la masa de limón se ha expandido... Ello implica que no sólo se han roturado nuevas tierras para ser implantadas con este frutal, sino que también se ha registrado una sustitución de plantaciones de caña de azúcar, en una proporción importante: ha afectado a una superficie de unas 8.500 hectáreas, lo cual implica que el 23% del incremento de la masa de limón registrado entre 1990 y 1999 ha sido sobre superficie anteriormente dedicada a la caña de azúcar (Madariaga, Fandos y Soria. s.f., p. 21).*

Esta expansión espacial de las hectáreas dedicadas al limón son el resultado más evidente..., de la importancia que ha adquirido la actividad citrícola en la provincia. A finales del XX, Tucumán aportaba el 90% de la producción limonera argentina, país que se encuentra en los primeros puestos de productores e industrializadores de este cítrico a nivel mundial; junto a la exportación de frutas en fresco de gran calidad, los derivados del limón obtenidos en plantas agroindustriales dotadas con los últimos avances tecnológicos, se han convertido en uno de los rubros más rentables de toda la economía tucumana.

Además, este proceso ha estado acompañado por la transición desde una estructura de tenencia de la tierra con predominio de las explotaciones familiares a otra en la que éstas están desapareciendo, y quedando la actividad progresivamente en manos de unos pocos agentes, integrados verticalmente, y con gran peso de los capitales internacionales.

En este sentido, es importante señalar el hecho de que la aparición de este tipo de capital

comenzó en 1993, cuando Merchant Bankers Asociados S.A. y MBP Internacional S.A. entran en el accionariado de San Miguel, la mayor citrícola tucumana, haciéndose con el control de la empresa un año después; a finales de los noventa, los grupos extranjeros procesaban ya el 48% de la fruta (a mediados de los sesenta lo hacían con tan sólo el 3%), desembarco de capital foráneo que ha supuesto, además, la absorción vía compra de competidores -con lo que la actividad limonera está quedando progresivamente en un número más reducido de manos-, y de inserción directa, de la mano de empresas vinculadas, en los circuitos de comercialización europeos”.

Cabe destacar que uno de los puntales en los que descansa la gran masa de ganancia de las empresas del sector está constituido por los despreciables salarios (muchas veces en negro) que se les paga a los braceros, quienes en muchos casos son acompañados en su trabajo casi esclavo por toda su familia.

La caña, el limón y la política

La era menemista (1989/1999) constituyó el momento histórico en el que las empresas multinacionales y el poder imperial cosecharon lo sembrado desde la década del ‘60. Se impusieron las privatizaciones (entrega) de las empresas estatales; la pérdida de los controles por parte del Estado; la obtención por parte de las empresas y bancos de millones de hectáreas fértiles a valores depreciados.

Esta pérdida de soberanía fue avalada a través de los distintos y sucesivos gobiernos que sostuvieron el proceso con actos jurídicos contrarios a los intereses populares: tal el caso de la aceptación de los términos de los bancos internacionales en la conformación de la Deuda Externa argentina.

En cada jurisdicción podemos encontrar concesiones de servicios, contrataciones o leyes dictadas para favorecer determinados proyectos económicos. Este es el caso del limón en Tucumán.

Para poder allanar cualquier dificultad, los grupos multinacionales interesados en ese sector, contaron con la mano amiga del Presidente Carlos Menem y de un tucumano que militaba en su propio staff: Ramón “Palito” Ortega.

Con el aval político presidencial y el aporte económico de las multinacionales, Ortega se convirtió en Gobernador de la provincia de Tucumán (período 1995/1999), cargo clave para imponer las medidas que requerían. Es en este período en el que se desplazan finalmente a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, otorgándose ventajas a los capitales extranjeros.

Al término del gobierno de Ramón “Palito” Ortega en Tucumán, la provincia quedó postrada frente al control ejercido por el capital multinacional sostenido por la implementación de las políticas neoliberales ejecutadas desde los gobiernos nacional y provincial con el diseño y la supervisión de organismos de crédito como el Banco Mundial.

Pobreza y desnutrición

Una de las notables consecuencias de la imposición del modelo neoliberal fue el aumento de la pobreza y la consiguiente desnutrición que produjo la muerte de cientos de niños.

El gobernador Julio Miranda ocupó su cargo entre 1999 y 2003. Al cabo de su gobernación se lo acusó por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público, corrupción en el manejo de los fondos del Estado, utilización personal de los fondos de planes sociales y sanitarios, agresiones a periodistas y personajes políticos y sociales, control de la Justicia, entre otros delitos y acciones graves.

Un diario provincial (La Gaceta) informó en noviembre de 2002 acerca de la muerte por desnutrición de 4 niños. Esta noticia permitió conocer más casos a lo largo de la provincia, lo que derivó en la intervención del Estado Nacional.

Un posterior relevamiento consignó que al menos 22.000 familias tenían niños menores de 12 años con desnutrición de segundo y de tercer grado. Sobre una población de casi un millón y medio de personas, más de 900.000 eran pobres y 460.000 permanecían con sus necesidades básicas insatisfechas.

Así se multiplicaron las denuncias de corrupción, especialmente porque la provincia recibía más de 17 millones de pesos por mes en concepto de planes y ayuda alimentaria. Se calcula que un monto similar fue recibido por la provincia para construcción de viviendas sociales.

Otro terrible ejemplo de desvío de fondos en Tucumán fue el préstamo que se tomó del Banco Mundial para construir una red de cloacas y una planta depuradora para varios barrios del conurbano de la ciudad capital, obras que nunca se construyeron pero que aumentaron el endeudamiento. La privatización de empresas estatales produjo un crecimiento alarmante de desocupación con la consecuente necesidad de crear fondos para implementar programas específicos de Asistencia Social. Muchos de estos Programas fueron atendidos con nuevos préstamos obtenidos por organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial. La consecuencia fue un mayor desmantelamiento del aparato productivo con el consiguiente aumento de pobreza, marginalidad, desnutrición y problemas sociales.

Federico Türpe realizó un extenso informe en el año 2003 (“**La desnutrición en Tucumán**”), en el que se da cuenta de la gran cantidad de causas judiciales que investigaron los desvíos de fondos realizados desde los organismos provinciales, desde las más bajas esferas hasta la propia cabeza del gobernador. Türpe afirma al fin que *“las investigaciones judiciales, poco a poco, se están diluyendo entre miles y miles de expedientes que se apilan en las laberínticas oficinas de los Tribunales. Burocracia, vicios procesales y tiempos que prescriben son algunas de las tantas excusas que se escuchan todos los días en los despachos. Los jueces saben cómo proteger a Miranda. Más de una decena de secretarios, fiscales y magistrados han sido apreciados o sancionados por haber denunciado una escandalosa dependencia política de la Justicia, el tercer poder necesario para ocultar la verdad.”*

Las relaciones del poder reforzaron la impunidad. El Gobernador Miranda pudo zafar de varios pedidos de juicio político realizados en la Legislatura. El entramado de la corrupción volvía a funcionar a pleno...

Otra vuelta de timón

Hacia 2005 se produjo un nuevo capítulo de la crisis tucumana, promovido nuevamente por injerencia de las necesidades de las multinacionales. La crisis conmovió esta vez a la producción del limón.

En una crónica publicada en el diario Clarín en octubre de 2005, Marina Aizen afirmó que *“este 2005, la zafra (de caña) será un récord: 2 millones de toneladas. Hace mucho que no se veía algo así en Tucumán. Los ingenios están más voraces que nunca, en los campos no se para de trabajar ni de noche ni de día. Pero, en los 90, este cultivo que forma parte del entramado histórico de los tucumanos, de sus alegrías y padecimientos, había llegado a estar en terapia intensiva. Entonces, la estrella era el limón. Pero, en esta temporada, el citrus entró en una fase de crisis. El gobierno provincial calcula que los productores tendrán que tirar 300 mil toneladas de fruta, los citricultores dicen que serán sólo 200 mil toneladas. ...”*

Alzen explicó esta decisión señalando que *“hoy, debido a la escalada del crudo, por primera vez Brasil ofreció mucha menos azúcar que la que demanda el mundo, porque privilegió su producción de alcohol como combustible para sus autos. ‘El azúcar está atada al barril del petróleo’, dice Jorge Rocchia Ferro, dueño del Ingenio La Florida y Azúcar Los Balcanes. Por eso, en 2004 se invirtieron 50 millones de dólares en el sector.” (Entre la crisis del limón y el regreso de la caña de azúcar, diario Clarín, 2/10/2005)*

Luego de haber desplazado a la caña de azúcar, imponiendo la producción de limones, generando un aumento extraordinario del subdesarrollo, la pobreza y la dependencia en Tucumán, el “MERCADO” no requería más limón, lo que se solucionaría dejando pudrir 300.000 toneladas de fruta.

A pesar de este discrecional y terrible manejo, algunos productores se esperanzaron porque la situación internacional se volvía favorable para la producción de azúcar, principalmente debido a que Brasil (primer productor mundial) no entregaría su provisión habitual al mercado internacional. Argentina podría cubrir entonces esa cuota. Pero, ¿qué significa que **“el azúcar está atada al barril de petróleo”?**, como decía un productor argentino.

Brasil produce desde la década de los ‘70 un derivado del alcohol (extraído de la caña de azúcar) que se utiliza como combustible, denominadoalconafta. Lo usa la mayoría de los automóviles en las grandes ciudades. Su valor es menor y además es... menos contaminante.

Ante el aumento del valor del petróleo y consiguiente crisis energética (se tiene en cuenta además la futura escasez de este bien) Brasil apuesta a mantener sus reservas petroleras. Por ello, apela a aumentar el cupo de caña de azúcar para la producción dealconafta. Perderá divisas en el corto plazo, pero sostendrá su estrategia de desarrollo a largo plazo.

Mientras tanto, la Argentina exporta petróleo en bruto. Y para colmo de males, la extracción está en manos de las empresas petroleras internacionales luego de la privatización de la estatal YPF.

Argentina sigue importando insumos, derivados del petróleo, productos con alto valor agregado. Y exporta a cambio materias primas producidas por los recursos naturales que van dejando de ser cada día menos argentinos.

El abuelo de las dulces princesas, el rey del azúcar

En un reportaje de junio de 2005, la revista especializada Producción presentó a Jorge Zorreguieta, Presidente del Centro Azucarero Argentino, para que explicara la coyuntura. Zorreguieta ejerció diversas funciones en las entidades agropecuarias del país, siendo Secretario de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Sociedad Rural, como así también fue presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias. Estos cargos fueron desempeñados desde 1960 hasta 1976. En abril de 1976, siendo Secretario de la Sociedad Rural Argentina, le fue ofrecida la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, función que desempeñó de 1976 a 1979. Al mismo tiempo ocupó el cargo de presidente de la Junta Nacional de Granos. En el año 1979, fue designado Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, función ejercida hasta 1981. Zorreguieta también integraba el International Policy Council for Agriculture, Food and Trade (IPC), con sede en Washington, cuya misión era la de *“discutir entre representantes de diferentes países las políticas de comercio y agricultura del mundo.”*

Semejante presentación nos lleva a juntar esta persona con la figura del padre de Máxima, casada con el príncipe de Holanda.

Recordemos que a Zorreguieta le fue impedida la entrada a ese país para conocer a la prime-

ra hija de Máxima, por razón de haber participado -como funcionario- de la dictadura militar durante la década del '70.

¿Cómo puede defender los intereses de los productores argentinos quien ha participado durante los últimos 50 años de gobiernos inconstitucionales y actividades corporativas ligadas a los intereses de las grandes empresas multinacionales, que dieron como resultado la destrucción del aparato productivo nacional?

En el referido reportaje, Zorreguieta afirmó que: *“Un crédito barato y oportuno es algo que falta en Argentina y eso es lo que hace falta para sostener precios en momentos determinados y no obligar al productor a mal vender. Ese es un tema que debemos insistir ante el Gobierno, que tiene entidades como el Banco Nación, al igual que los bancos oficiales de provincias que conforman el instrumento fundamental para financiar al campo”*.

Zorreguieta exhibía sin pudor la esencia de la entrega a los intereses multinacionales, repitiendo la vieja receta: producir y exportar lo que el mercado internacional demanda; exportar a valores impuestos por el mercado, aunque a veces se deba perder y... lo más importante de todo: constituirse como beneficiarios de nuevos créditos para enriquecerse aún más y cumplir a la vez con los preceptos imperiales.

Como si no hubiera sido uno de los responsables de la destrucción de la industria azucarera, Zorreguieta se presentaba así como el líder de la reconstrucción, para cuyo reequipamiento se volvía necesario una gran inversión, lo que requería tomar préstamos.

A principios de diciembre de 2005 arribó a la provincia de Jujuy (noroeste argentino) la princesa Máxima Zorreguieta (licenciada en Economía e hija de Don Jorge), en su carácter de representante de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el “microcrédito” en la Argentina, en el marco del Año Internacional de Microcréditos de Naciones Unidas.

Según sus propias palabras, el propósito de su viaje fue *“incentivar la financiación para los sectores más pobres”*. Máxima hizo su gestión acompañada por funcionarios de la embajada de Holanda y representantes de bancos y entidades financieras de ese país.

Luego, la princesa participó en Buenos Aires de una reunión donde se presentó formalmente la ONG Planet Finance, cuyo representante en Argentina era en ese momento Alfonso Prat-Gay, ex titular del Banco Central argentino, quien además fue profesor de Máxima en la Universidad Católica y jefe del negocio mundial de monedas de la banca JP Morgan en Londres.

La ONG Planet Finance contaba entre sus miembros a notables empresarios representantes de empresas multinacionales, tales como: Jean-Philippe Courtois, de la corporación Microsoft filial francesa; Bertrand Lavayssière, Jérôme Gallot y Patrick Gounelle de Cap Gemini y Ernst & Young, líder mundial en administración de servicios de Tecnologías de la Información y Consultoría que reporta ganancias billonarias; Bernard Herman de Dexia Banque, segundo grupo financiero belga que controla una cartera de 1,8 billones de dólares; Fred Hessabi de Siebel Systems, proveedor mundial líder en aplicaciones de software para comercio electrónico; entre otros.

Luego de semejante profusión de personajes y del enorme interés que exhiben por ayudar a los necesitados del mundo, podríamos pensar que los pobres de los países subdesarrollados (o mejor dicho “países en vías de desarrollo”, eufemismo con el que los definen los poderosos) son obcecados y algo tololos, ya que -a pesar de tanta ayuda- se resisten salvajemente a salir de su estado de postración para vivir mejor, prefieren padecer los males de la pobreza, la malnutrición y la ignorancia.

O quizás deberíamos pensar que tales personajes se integran a los Organismos internacionales de promoción del crédito que sirven de bases camufladas para sostener las políticas económicas que mantienen sometida a las dos terceras partes de la humanidad.

Los traidores a sus pueblos existen en todos los países. Son preparados desde niños para ello.

Máxima Zorriegueta visitó a los pobres del noroeste argentino, empobrecidos por una serie de procesos en los que participó activamente su papá Jorge. En esos procesos incluimos a otros personajes nefastos, algunos dictadores asesinos por obra del uso de las armas. Y otros -sin usar armas directamente- también cómplices en la producción de subdesarrollo, pobreza y muerte.

Episodio N° 3: siglos XX y XXI

El Estado, apéndice de las Multinacionales

Para el economista ortodoxo Jack Hirshleifer , el Estado es *“un sistema de subordinación que organiza a todos los individuos de un área geográfica dada, dentro de la cual se posee un monopolio efectivo de la fuerza física”*.

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell entiende por Estado al *“componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada”*.

En el desarrollo de la Teoría del Estado, la escuela alemana (a partir de las ideas de Immanuel Kant) propone que -políticamente- en un Estado de Derecho bajo la forma republicana, el poder legislativo es el encargado de sancionar las leyes mientras que el Poder Ejecutivo debe hacerlas cumplir.

El Estado es el administrador de los recursos naturales y bienes de un país. La administración de los bienes comunes en manos del Estado se desarrolla entonces a partir del cumplimiento de las leyes emanadas del poder legislativo.

Son innumerables las actividades que deben enfrentar los funcionarios del Estado para poner en marcha los recursos y permitir y mejorar la vida de los ciudadanos, desde la regulación de la explotación de los recursos naturales, la implementación de sistemas y programas económicos, financieros, educativos, sanitarios, de seguridad, saneamiento, etc.

El país y sus habitantes viven en forma permanente -enmarcados por las leyes- en un entramado de relaciones entre lo público y lo privado.

Los funcionarios públicos del Estado deben basar su tarea en las leyes en vigencia y son meros administradores del bien común. Como administradores, deben dar cuenta de sus actos. El Estado posee además una serie de controles que deben funcionar en forma independiente del Poder Ejecutivo, tal como -en Argentina- la Sindicatura General de la Nación (Sigen), entre otros.

Los sistemas de control deben garantizar la legalidad de los actos de gobierno. En ese sentido, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación tiene como objetivo primario el de *“contribuir a que se adopten decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos”*.

Son innumerables las concesiones que otorga el Estado (ya sea a nivel nacional como provincial y municipal) a entes o empresas privadas para uso de recursos o infraestructura estatal, con el fin de brindar a la población todo tipo de servicios: de espacio público para servicio de transporte urbano; de servicios turísticos de playa; de espacio público para tendido de líneas de electricidad, telefonía, etc.; de espacio público para venta o comercialización de productos; de explotación de yacimientos minerales o de pesca; etc.

Existen muchísimos casos en los que el Estado es contratante en otras actividades tales como la impresión de boletines y publicaciones o en las que compra insumos y bienes, en operaciones o licitaciones que deben ser públicas y “eficaces” para la mejor administración.

Sin embargo, tal como vimos en este mismo artículo, los procesos de licitaciones públicas se prestan a manejos turbios toda vez que los funcionarios del Estado se desempeñen como agentes de negocios para intereses particulares.

Estos procesos de licitaciones ilegítimas se inician generalmente a partir de un proyecto hecho a la medida de un particular, que puede ser una empresa existente o una sociedad creada ad hoc.

Luego, el proyecto es presentado y defendido por el funcionario corrupto como un hecho positivo que debe saludarse por “los beneficios” que llevará a los ciudadanos.

Posteriormente se realiza una operación de prensa para montar un escenario favorable.

Por fin, se legaliza el negocio. Veamos uno de los tantos ejemplos que debimos padecer:

El negocio de la chatarra

En mayo de 1996 (segundo gobierno de Carlos Saúl Menem), la empresa Scrap Service ganó la licitación para montar un desarmadero para convertir en chatarra automóviles y camiones viejos en el marco del denominado “Plan canje”.

El Plan pudo ponerse en práctica recién en 1999. Fue publicitado con “bombos y platillos” como modo de renovar el parque automotor para aportar mayor seguridad al sistema vial y reactivar la producción de la industria automotriz, aumentando la oferta laboral.

Por este “Plan”, los propietarios de vehículos con más de 10 años de antigüedad podían darlos de baja para recibir un bono de descuento para comprar una nueva unidad.

El vendedor de un automóvil viejo debía abonar \$ 60 por el desguace y recibía un descuento de \$ 4.850 en la compra de uno nuevo.

Este descuento se cargaba en partes iguales entre el sector privado y el Estado, que se comprometía a entregar a los concesionarios un bono utilizable por ellos o por las terminales automotrices para el pago de impuestos nacionales ante la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Sin ahondar en detalles sobre el negocio de las empresas automotrices, resulta interesante analizar el negocio del proceso de desguace de los automóviles viejos. Este negocio paralelo no fue atendido por los funcionarios o por la prensa. Por él, Scrap Service sería la dueña de los restos de los autos dados de baja. No sólo no pagaría un centavo por ellos, sino que recibiría un pago por realizar el desguace, convertirlo en chatarra y quedarse con la materia prima y su comercialización.

El cálculo inicial fue el de obtener 100.000 toneladas de chatarra al año, lo que bajaría notablemente los costos de los negocios de la empresa madre Techint, que consumía entonces unas 400.000 toneladas de chatarra al año. Recordemos que Siderca (otra empresa dentro de la sociedad), junto con Siderar, absorben el 70% del consumo de chatarra en la Argentina. En 1996, Luis Betnaza, directivo de Scrap, afirmó que *“pensamos el negocio más allá del Plan Canje, que caduca a fines de 1997. Nuestro interés es mejorar los costos de la industria siderúrgica”*. Actualmente (año 2012), Scrap se presenta a sí misma como una empresa *“dedicada exclusivamente a la comercialización de bienes y servicios derivados del reciclaje y la recuperación de residuos y desechos sólidos a través de la selección, clasificación y procesamiento industrial de los mismos...”*

En un reportaje televisivo, Roberto Ciccioli, Gerente general de la empresa “Scrap Service”, confirmó que *“es una empresa que se dedica a la compra de chatarra y luego de una transformación, la transforma n materia prima para las acerías, entregándole el material a dos empresas del grupo “Techint”, a Siderca Tenaris y a Siderar”*.

Mientras la materia prima se torna cada vez más escasa y costosa en todo el mundo, las empresas automotrices -que utilizan una gran cantidad de materia prima de diverso origen para su desarrollo- buscan nuevas formas de disminuir costos y reutilizar elementos. Se calcula que en los últimos años el costo de las materias primas básicas para fabricar un automóvil aumentó casi mil dólares.

Es por ello que la legislación europea obliga -desde 2007- a los fabricantes e importadores de vehículos a retirar de forma gratuita los automóviles viejos para facilitar su reciclaje. Según un estudio de la Asociación alemana de la Industria Automovilística (VDA), *“los productores no tienen costes extraordinarios por recoger los vehículos viejos, ya que éstos son un recurso económico solicitado debido a la alta demanda mundial de metales y los precios de las materias primas”*.

En síntesis: mientras que en el mundo aumenta el valor de las materias primas y de la chatarra para su reutilización en la fabricación de nuevos automóviles, el Estado nacional argentino pagó varios millones de dólares a la empresa Scarb (subsidiaria de la multinacional Techint, propietaria de Siderar) para que se ocupara de desguazar los automóviles viejos dados de baja por sus propietarios. Además, cada propietario debió abonar una tasa por el desguace. Para que el negociado fuera completo, la chatarra obtenida de los desguaces pasó a propiedad de Scrap, en forma gratuita, lo que generó una enorme ganancia, especialmente para las empresas del Grupo Techint.

Recordemos que Siderar es líder en el negocio del acero que se utiliza en autos, electrodomésticos y en la construcción.

La continuidad de los negocios

Los gobiernos pasan pero los negocios permanecen. Para muestra, nada mejor que Techint, la empresa madre de Scrap.

Cynthia Lana investigó la historia de Techint y su relación con la destrucción del sistema productivo argentino, especialmente durante la Dictadura Militar y el accionar de su ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz.

El mítico fundador de la empresa, Agostino Rocca, desempeñó puestos claves en empresas que manejaban la logística de guerra de la Italia facista de Mussolini, como el consorcio Cornigliano.

Según Lana, “también desde 1939 y hasta 1943, Agostino desempeñó funciones importantes en la Confindustria, la Cámara de Corporaciones Fascistas... Además, estaban a su cargo las empresas Finsider, Terni, Siac y Dalmine, hasta 1939, gracias a lo cual sentó una estrecha relación con empresarios alemanes. Al finalizar la guerra interimperialista, se organiza en Italia la empresa Compañía Técnica Internazionale (Techint) que se instala en la Argentina en 1946, mediante Techint Cía. Técnica Industrial S.A.

Las nuevas firmas instaladas por Techint entre 1976 y 1983 muestran hasta qué punto esta transnacional se vio favorecida por la política económica de la dictadura cívico militar. Ellas son: las petroleras Tecpetrol SA (1979), Golfo Petrolera SA, Cañadón Piedras SA, Progreso Perforaciones Petroleras (estas tres últimas de 1981); la minera Tecminera SA (1979); Consorcio de Comunicaciones Patsa, fabricante e instaladora de centrales telefónicas (1978); Metalúrgica Metanac SA, destinada a grandes proyectos hidroeléctricos y las empresas constructoras Ingeniería Tauro SA, Mudar SA y Nuclear SA, orientada a la instalación de plantas nucleares.

En los años noventa, Roberto Rocca llevó adelante el proyecto de producción de aceros planos al ganar la privatización de SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), durante el gobierno de Carlos Menem, y transformar a la ex empresa estatal en Siderar.

Con esta incorporación, Techint amplía colosalmente la producción de tubos de Siderca. Tal expansión le permite sumar la matriz italiana Dalmine, la mexicana Tamsa, la NKK de Japón, Algoma de Canadá, Confab de Brasil y Tavsa de Venezuela. Tal proceso condujo a la creación de Tenaris, en 2002, que fabrica hoy uno de cada tres caños petroleros que se venden en el mundo y es una de las empresas más valiosas del orbe, superando en cotización a firmas como Repsol YPF, Kodak o Amazon.” (Cynthia Lana, “La historia del grupo Rocca, Techint y el Mercosur”).

Relaciones del Grupo Techint con el poder

Un alto porcentaje de obreros secuestrados, desaparecidos o asesinados durante la última dictadura en Argentina se desempeñaban en plantas pertenecientes al Grupo Techint.

Uno de los tantos centros clandestinos de detención (el Tiro Federal) funcionó lindero a la fábrica Tenaris Siderca de Campana.

Con la derogación de las Leyes de la impunidad, se reabrieron los juicios por los crímenes de lesa humanidad. En 2011, la agrupación “Trabajadores y Delegados de los años ‘70 (por juicio y castigo a los responsables del golpe cívico militar)” y la “Comisión de Desaparecidos de Zárate Campana” volvieron a presentar ante la Justicia documentación acerca de la participación de integrantes de los directorios de empresas como Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia de las fuerzas represivas, así como “el marcado” de delegados y activistas obreros.

Las leyes de la impunidad -dictadas desde el Estado democrático- tendieron un manto protector para que no salieran a la luz las responsabilidades de las grandes empresas en la represión sobre el pueblo pero especialmente para crear y consolidar las condiciones para la imposición de políticas económicas favorables a sus intereses y lograr el vaciamiento del Estado y el control del país.

Con referencia a Techint, la relación con el sistema de poder político continúa vigente.

Bibliografía

- Molina, Raul A. “Hernandarias, el hijo de la tierra”. Ed. Lancestremere. Buenos Aires, 1948.
- Guillermo O’Donell. “Apuntes para una teoría del Estado”. Revista Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978
- Informe Político. Informe de la Comisión Bicameral - Tucumán 1974-1983 (Anexo I). La violación a los derechos humanos en la provincia de Tucumán. En: http://www.nuncamas.org/investig/nmastuc/nmastuc_informe3.htm
- Roberto Pucci. El ‘Affaire del Azúcar’: cuando el regimen de Onganía tomó por asalto la provincia de Tucumán (1966-1970) (parte I). Los empresarios nacionales en el Tucumán antisemita, anticomunista y oligárquico. ARGENPRESS.info. En: http://www.lafogata.org/003arg/arg11/ar_afaire1.htm
- Alejandro Olmos. La deuda externa argentina. En: <http://www.elsitioperonista.com.ar/olmos.htm>
- Juan José Natera Rivas y Ana Ester Batista Zamora. La evolución del sector agrícola en Tucumán (argentina) desde finales del XIX: una aproximación a través de la dinámica de los grupos de cultivos. Departamento de Geografía, Universidad de Málaga. En: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-197.htm>
- Hernán López Echagüe. “Palito. Detrás de la máscara” . Edit. Sudamericana, 1998
- Jorge Juan y Antonio Ulloa. “Noticias Secretas de América, sobre el estado naval, militar y político del Perú y provincia de Quito”. Citado en Revista “Todo es Historia”, Buenos Aires.
- INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ministerio de Economía de la Nación. República Argentina.
- Archivos de los diarios Página 12; Clarín; La Nación; La Voz del Interior; La Gaceta.

Artículos periodísticos:

- “Techint será la encargada de desarmar los autos viejos”. Diario Clarín, 19 de mayo de 1996. <http://www.clarin.com>
- “Autos: trabas en el Plan Canje”. Diario Clarín, 30 de marzo de 1999. <http://www.clarin.com>
- “El plan Canje recicla los metales”. Diario La Nación, Argentina, 12 de junio de 1999.

<http://www.lanacion.com.ar>

- “El Plan Canje ya le cuesta al Estado 350 millones de pesos”. Diario Clarín, 9 de setiembre de 1999. <http://www.clarin.com>
- “El éxito del plan Canje, una tristeza para Techint”. Diario La Nación, Argentina, 14 de setiembre de 1999. <http://www.lanacion.com.ar>
- “Elaboran otro plan Canje de autos”. Diario La Nación, Argentina, 14 de noviembre de 2002. <http://www.lanacion.com.ar>
- “Demanda laboral por una desaparición durante la dictadura”. Diario MDZ, 4 de febrero de 2012. <http://www.mdzol.com>
- “Alerta por la escasez de 14 materias primas clave para la industria”. Diario La Razón (España), 1 de abril de 2012. <http://www.larazon.es>
- “A pesar del final del plan Canje, la chatarra es aún un buen negocio”. Diario La Nación, Argentina, 9 de abril de 2012. <http://www.lanacion.com.ar>
- “Estamos revisando la matriz de negocios del sector empresario”. Revista Debate, 9 de mayo de 2012. <http://www.revistadebate.com.ar>